

44^a. reunión - 32^a. sesión ordinaria - Septiembre 25 de 1920

PRESIDENCIA DEL Dr. D. BENITO VILLANUEVA

Senadores presentes: Albarracín Martín, Caballero Ricardo, del Valle Iberlucea Enrique, Esteves Manuel I., Gallo Vicente C., García Luis, Garro Pedro A., Iturbe Octavio, Larlús Pedro, Llanos Pedro, Luna David, Roca Julio A., Saguier Fernando, Soto Pedro Numa, Torino Martín M., Vidal Juan R., Villanueva Benito, Zabala Carlos.

Senadores ausentes: Con aviso: Castañeda Vega Francisco, González Joaquín V., Iturraspe Ignacio de, Linares Luis, Melo Leopoldo, Patrón Costas Robustiano.

SUMARIO

- 1.—Se integran las Comisiones de Negocios Constitucionales y de Códigos.
- 2.—Asuntos entrados.
- 3.—Campo de Deportes del Club de Gimnasia y Esgrima. Se aprueba.
- 4.—Concesión de un terreno al Círculo Militar.
- 5.—Proyecto de ley acordando el 20 o/o de aumento sobre sus haberes a algunos profesores de enseñanza secundaria.
- 6.—Jubilación de empleados y obreros de empresas particulares. Se aprueba en general
- 7.—Pensiones.
- 8.—Prohibición del Juego de Carreras en los días 25 de Mayo y 9 de Julio.
- 9.—Funcionamiento de la Junta Escrutadora en las elecciones municipales. Se aprueba.
- 10.—Pensiones militares.
- 11.—Pensiones civiles.
- 12.—Permiso para ausentarse del país al señor C. A. Gauthier.
- 13.—Venía para demandar a la nación.
- 14.—Protocolo que pone término a la reclamación por la captura de la barca "Jeanne Amelle".
- 15.—Adquisición de un barco oceanográfico. Se aprueba.
- 16.—Construcción de un hospital en Concepción del Uruguay.
- 17.—Se aprueba el protocolo que pone término a la

reclamación por la captura de la "Jeanne Amelle".

- 18.—Se autoriza la erección de un busto a Eduardo Sívori.
- 19.—Exoneración de derechos a la Empresa Geodhart por introducción de materiales para las obras de canalización del Delta del Paraná. Se aprueba.
- 20.—Permisos para ausentarse del país a los señores A. J. Laurey y F. C. Wentrell. Se aprueban.
- 21.—Pensiones.

—En Buenos Aires, a 25 de septiembre de 1920, siendo las 16 y 25, dice el

Sr. Presidente (Villanueva). — Continúa la sesión con 16 señores Senadores.

1

SE INTEGRAN LAS COMISIONES DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES Y DE CODIGOS

Sr. Presidente (Villanueva). — En la sesión anterior se pidió la integración de la Comisión de Negocios Constitucionales, en reemplazo del señor senador González. La presidencia la integra con el señor senador Linares.

También está desintegrada, por la misma razón, la Comisión de Códigos. No sé si el H. Senado desea la integración...

Sr. Roca. — Yo hice moción de que se integrara.

Sr. Presidente (Villanueva). — ¿La de Códigos, también?

E, departamento de justicia e instrucción pública, dice lo siguiente: "Los sueldos de los profesores de enseñanza secundaria, comprendidos en el inciso 8o., ítem 1o., partidas 2 y 3, incisos 9o., 10 y 12, serán liquidados con un 20 o/o de aumento, etcétera".

El inciso 8o., ítem 1o., corresponde a la Universidad de Buenos Aires, y las partidas 2 y 3, al Colegio Nacional y a la Escuela Superior de Comercio. Los incisos 9o., 10 y 12, comprenden, respectivamente, la instrucción secundaria, las escuelas normales y los institutos de enseñanza especial. De donde resulta que los profesores de los colegios nacionales de Córdoba y La Plata, han sido excluidos de los beneficios del aumento del 20 o/o.

Son los únicos de toda la República que se hallan en esas condiciones y me parece evidente que la exclusión obedece a una omisión involuntaria en que se ha incurrido, al redactar el ítem 84, olvidándose que los mencionados colegios están anexados a las respectivas universidades de Córdoba y La Plata.

No se concibe que haya una razón para que los profesores de La Plata y Córdoba queden fuera de los beneficios que la ley acuerda a todos los demás; pero eso es lo que ocurre actualmente, como consecuencia del error apuntado. La leyenda del ítem 84 debió decir: "Los sueldos de los profesores de enseñanza secundaria, comprendidos en el inciso 8o., ítem 1o., partidas 2 y 3, ítem 3, partida 5, ítem 5, partidas 3 y 4, incisos 9o., 10 y 12", etcétera. Las palabras subrayadas corresponden a los ítem y a las partidas omitidas.

Nada más.

Sr. Presidente (Villanueva). — A la comisión de presupuesto.

Se va a tratar ahora el suplemento de la orden del día número 18.

6

JUBILACION A EMPLEADOS Y OBREROS DE EMPRESAS PARTICULARES

PARTIDA 6a.

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación os aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Objeto y beneficiarios de la ley

Artículo 1o. — Créase la Caja Nacional de Jubilaciones, pensiones y subsidios para el personal permanente de las empresas particulares de tranvías, teléfonos, telégrafos, gas, electricidad y radiotelegrafía, constituidos en virtud de autorización del Gobierno Nacional o de la Municipalidad de la Capital Federal, aun cuando éstas, por su naturaleza, se extiendan más allá del perímetro del municipio.

El personal permanente de agencias o dependencias de esas mismas empresas, aunque no realice por el momento servicio en común con ellas, queda comprendido en las disposiciones de esta ley cualquiera sea el lugar de su funcionamiento en la Nación.

Art. 2o. — Podrán acogerse a los beneficios y obligaciones de la presente ley los empleados y obreros de las empresas de jurisdicción provincial idénticas a las que se refiere el artículo 1o., más las de aguas corrientes y servicios sanitarios, cuyos representantes lo solicitaren con intervención de los respectivos gobiernos, siempre que las empresas, los empleados y obreros y dichos gobiernos hagan los aportes y se sujeten a las condiciones fijadas en esta ley; pero ninguno de los beneficios concedidos por ella le serán acordados sino después de haber transcurrido tres años desde la fecha de haberse acogido a la presente ley.

Art. 3o. — Las disposiciones de esta ley comprenden a todos los empleados y obreros permanentes de las empresas a que se refieren los artículos anteriores, a los que perteneciendo al personal permanente de las mismas hubieran sido destituidos después del 25 de septiembre de 1918 por causas que no sean las enumeradas en el artículo 21, a los médicos de las sociedades de socorro reconocidas y dependientes de las empresas, a los de la caja que esta ley organiza y a las personas a quienes se refiere el artículo 25 con relación a los empleados y obreros permanentes que hubiesen fallecido con posterioridad a la misma fecha.

Se considera empleados u obreros permanentes a los efectos de esta ley, además de aquellos cuya ocupación tenga dicho carácter, a los que tuvieren más de seis meses de servicios continuos en una empresa.

No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los empleados y obreros que desempeñen servicios accidentales o de carácter transitorio.

Art. 4o. — A los efectos de la presente ley, queda reconocida la antigüedad de cada empleado y obrero desde el día en que empezó a prestar servicio en cualquiera de las empresas comprendidas en ella.

A los que hayan trabajado en compañías actualmente fusionadas o adquiridas por alguna de las actuales o de sus antecesoras, se les acuerda la antigüedad desde el día en que empezaron a prestar servicios en la primitiva empresa.

Art. 5o. — En el cómputo de años de servicios sólo se tomarán en cuenta los servicios efectivos, aunque fuesen discontinuos, de los empleados y obreros, sea cual fuere la forma en que perciban sus haberes y prestados en cualquiera de las empresas a que se refiere el artículo 1o. de esta ley o en aquellas que se acojan a sus disposiciones de acuerdo con el artículo 2o., como asimismo los servicios prestados por dichos empleados u obreros en las dependencias del gobierno nacional, municipalidad de la Capital Federal o empresas ferroviarias, como lo establece el artículo 54, no pudiendo computarse sino los de una empresa cuando

simultáneamente el empleado u obrero hubiera prestado servicios en alguna de las otras.

La fracción que en el término total de antigüedad exceda de seis meses será computada por un año entero.

CAPÍTULO II

De las jubilaciones

Art. 6o. — La jubilación que acuerda esta ley es:

- 1o. Ordinaria.
- 2o. Por retiro voluntario.
- 3o. Por invalidez.

Art. 7o. — La jubilación ordinaria se acordará a los empleados u obreros en las condiciones siguientes:

1o. Integra:

Al empleado u obrero que habiendo prestado 30 años de servicios como mínimo, haya cumplido 50 años de edad.

- 2o. Reducida en un 5 % por ciento por cada año de edad que le falte para los 50, al empleado u obrero que, habiendo prestado 30 años de servicios como mínimo, tenga más de 45 años de edad y solicite jubilarse.

Art. 8o. — El monto de la jubilación ordinaria se calculará con relación al promedio de los sueldos percibidos durante los cinco últimos años de servicios y con sujeción a la siguiente escala:

- 1o. Hasta cien pesos moneda nacional de sueldo, noventa y cinco por ciento.
- 2o. Sueldos entre cien y trescientos pesos moneda nacional, noventa y cinco pesos más el ochenta por ciento de la diferencia entre cien y trescientos pesos moneda nacional.
- 3o. Sueldos entre trescientos y mil pesos moneda nacional, doscientos cincuenta y cinco pesos más el setenta por ciento de la diferencia entre trescientos y mil pesos moneda nacional.

Art. 9o. — Corresponde la jubilación por retiro voluntario al empleado u obrero que teniendo más de diez años de servicios y cincuenta de edad no alcance al número de años de servicios exigidos por el artículo 7o.

Esta jubilación se calculará a razón de dos por ciento de la jubilación ordinaria, por cada año de servicios.

Art. 10. — Los empleados u obreros que teniendo menos de diez años de servicios alcancen los 50 de edad y deseen retirarse, tendrán derecho a una indemnización igual a las sumas aportadas por ellos al fondo de la Caja, más los intereses a razón del 5 % anual capitalizados por año. En ningún caso se calcularán esos intereses con posterioridad a la fecha del retiro.

Art. 11. — A los empleados u obreros que fuesen declarados cesantes por no requerirse sus servicios o por razones de economía o que fuesen destituidos por causas distintas a las que se refiere el artículo 21 y a las que por contraer matrimonio se vieren obligadas por los reglamentos de las empresas a dejar el trabajo siempre que por esta ley no tuvieran derecho a un beneficio mayor, se les acordará:

- 1o. El 5 % de las sumas que hubiesen percibido en concepto de sueldos o remuneración de su trabajo, más los intereses a razón del 5 % anual, capitalizados anualmente, a los que tuvieran menos de diez años de servicios.

- 2o. Un mes de sueldo por cada año de servicios, a los que tuvieran diez años o más de servicios y menos de veinte.

- 3o. Una jubilación equivalente al 2 % de la jubilación ordinaria por cada año al que tuviere más de veinte años de servicios.

Art. 12. — Los empleados u obreros comprendidos en el artículo anterior que reingresaren posteriormente al servicio de las empresas, tendrán derecho a efectos de esta ley, a que se les compute los años de servicios prestados antes de su cesantía, siempre que hubieran renunciado a los beneficios de dicho artículo o que restituyan a la caja en una sola vez, las sumas que hubieren percibido de la misma por razón de su cesantía.

Art. 13. — El monto de la jubilación por invalidez se calculará en razón de un 5 por ciento del monto de la jubilación ordinaria por cada año de servicios hasta su máximo.

Art. 14. — Corresponde la jubilación por invalidez, dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior:

- 1o. Al empleado u obrero que después de diez años de servicios fuese declarado física e intelectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo o de otro compatible con su actividad habitual o su preparación comprobada.

- 2o. Al empleado u obrero que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados se incapacite en cualquier forma permanente en un acto de servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo servicio.

Art. 15. — En ningún caso se podrá acordar jubilación por invalidez a quien inicie las gestiones después de seis meses de haber dejado de formar parte del personal de las empresas, salvo el caso de fuerza mayor, incapacidad o imposibilidad para gestionarla.

Art. 16. — Las jubilaciones por invalidez se acordarán con carácter provisorio, y los beneficiarios quedarán sujetos a las revisiones que en número de dos anuales, como máximo, imponga el directorio de la caja dentro de los cinco años posteriores a su otorgamiento, a partir de cuya fecha se considerarán definitivas.

Art. 17. — No se podrá acordar jubilación por invalidez sin previo informe del departamento nacional de higiene o del médico o médicos designados al efecto por el directorio, respecto a las causas de imposibilidad físicas e intelectuales alegadas. Sin perjuicio de esto, el directorio, ordenará todas las averiguaciones que estime convenientes.

Art. 18. — Únicamente los que hayan obtenido jubilación ordinaria podrán volver al servicio. En este caso el jubilado, cesará en el goce de la jubilación, y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Abandonado éste, volverá al goce de la jubilación, sin que pueda interponer reclamo alguno para que le sea aumentada, por cuya causa no se le exigirán los aportes establecidos en el artículo 35, con relación al nuevo empleo.

Art. 19. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior al jubilado por invalidez cuyos servicios fuesen utilizados en otro empleo; en este caso percibirá, además de sueldo, la fracción de la jubilación por invalidez que le acuerde el directorio de la caja proporcionalmente a la disminución sufrida en su capacidad de trabajo.

Si alcanzase los años de servicios para obtener jubilación ordinaria, le será acordada jubilación definitiva igual al monto de la jubilación ordinaria, que co-

responda al sueldo de su nuevo empleo, más la fracción de la jubilación por invalidez que haya percibido.

Art. 20. — Las jubilaciones, retiros y subsidios uno vez concedidos serán pagados desde el día en que el interesado deje el servicio, y a los que ya lo hubieran dejado desde el día en que se les acuerde la jubilación. En los casos de invalidez o cuando el empleado u obrero fuera declarado cesante o destituido por causas no previstas en esta ley, la jubilación o el subsidio serán abonados desde el día en que el empleado u obrero por razón de su invalidez o de su cesantía se vió privado de su empleo, a cuyo efecto es requisito indispensable, para su constatación, la comunicación inmediata del hecho al directorio de la caja salvo el caso de que por imposibilidad o fuerza mayor no pudiera comunicarse.

Si el empleado u obrero que se hallare en estas condiciones falleciere sin haber percibido el importe de la jubilación que le hubiere correspondido desde el día en que por su invalidez o cesantía se vió obligado a dejar su empleo, dicho importe será entregado a las personas mencionadas en el artículo 25, sin perjuicio del derecho a percibir la pensión que corresponda por esta ley.

Art. 21. — Los empleados u obreros que no tuvieren familia que sostener, que hubieren llenado las condiciones exigidas para tener derecho a ser jubilados, y que antes de serlo fueran destituidos por mal desempeño de los deberes de su cargo o por abuso de bebidas alcohólicas durante el ejercicio del mismo o condenados por sentencia judicial por delito que haya merecido pena de presidio o de penitenciaría, no serán jubilados, pero se les devolverá el importe de los descuentos hechos a sus sueldos siempre que no hubiere lugar a aplicarlo a la indemnización del daño civil causado.

En caso de tener familia que sostener, no se devolverá al penado el importe del descuento hecho a sus sueldos, pero gozarán de la pensión que corresponda a la jubilación perdida, las personas que tengan derecho a ella con arreglo a esta ley.

Art. 22. — El derecho para pedir la jubilación se extingue a los cinco años a contar desde el día en que se dejó el servicio, salvo caso de demencia, incapacidad o fuerza mayor, y mientras esas circunstancias subsistan.

Art. 23. — La jubilación es vitalicia y el derecho a percibirla solo se pierde por las causas expresadas en esta ley. El jubilado perderá todo derecho a la jubilación si se domiciliase en el extranjero, sin obtener previamente permiso del Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 24. — La conmutación o el indulto no harán renacer los derechos perdidos como consecuencia de lo dispuesto por esta ley.

CAPÍTULO III

De las pensiones

Art. 25. — En los mismos casos en que con arreglo a esta ley haya derecho a gozar de la jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado u obrero, tendrán derecho a percibir la pensión en la proporción y condiciones establecidas en este capítulo: la viuda, el viudo inválido, los hijos y en su defecto los padres y a falta de estos, las hermanas solteras del causante que hubiesen estado a cargo de éste.

Si el fallecido hubiese sido ya jubilado, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a pensión en las condiciones establecidas en los artículos siguientes, sin más trámite que el de

justificar su personería, acreditar la existencia de la jubilación de conformidad a esta ley y observar los requisitos establecidos.

Art. 26. — El derecho a gozar de la pensión entre las personas mencionadas en el artículo anterior corresponderá desde el día del fallecimiento del causante y se otorgará en la forma y orden siguiente:

- 1o. A la viuda y al viudo incapacitado para el trabajo en concurrencia con los hijos.
- 2o. A los hijos solamente.
- 3o. A la viuda en concurrencia con los padres del causante, siempre que éstos estuviesen exclusivamente a cargo de aquel.
- 4o. A los padres que se encuentren en las condiciones del inciso anterior.
- 5o. A las hermanas solteras del causante que se encuentren en las condiciones de los padres.

Los hijos naturales reconocidos o declarados tales por sentencia judicial, gozarán de la parte de pensión a que tengan derecho con arreglo a la legislación civil.

Art. 27. — El importe de la pensión será equivalente al 50 o/o del total de la jubilación que percibía o a que tenía derecho el causante. La mitad de la pensión corresponde a la viuda, si concurren los hijos o los padres del causante; la otra mitad se distribuirá entre estos "per capita". A falta de padres, hijos o hermanas, la totalidad de la pensión corresponderá a la viuda.

En los casos de los incisos 1o. y 2o. del artículo 26o., si se extingue el derecho a la pensión de algunas de las personas enumeradas en ellos, la parte correspondiente acrecerá a la de los hijos comprendidos en los beneficios de esta ley.

Art. 28. — Si la esposa del empleado quedase viuda hallándose divorciada por su culpa o hubiese estado separada de hecho sin voluntad de unirse, no tendrá derecho a pensión, y ésta pasará a las personas que con arreglo a esta ley tengan derecho a ella.

Art. 29. — Si a la muerte del causante de una pensión, quedaran huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se distribuirá en la proporción que corresponda a los mismos y será entregada a sus respectivos representantes legales.

Art. 30. — Las pensiones son vitalicias y el derecho a percibirlas solo se pierde en los casos establecidos por esta ley.

Art. 31. — No se acumularán dos o más pensiones o jubilaciones a la misma persona. Al interesado le corresponde optar por la que le convenga, y hecha la opción, quedará extinguido el derecho a las otras.

Art. 32. — Las pensiones serán acordadas por el directorio de la caja ante el cual deberán solicitarse, acompañando los recaudos necesarios para justificar que el postulante está en las condiciones de esta ley. El directorio acordará o desechará en definitiva la solicitud, pero sus resoluciones podrán ser apeladas en la forma y a los efectos establecidos en el artículo 20.

Art. 33. — Las personas enumeradas en el artículo 25 tendrán derecho a una indemnización igual al 5 o/o de las sumas percibidas en concepto de sueldos por el empleado u obrero fallecido que no deje derecho a pensión. Pero si el empleado u obrero tuviere 20 años o más de servicios y falleciere sin haber adquirido el derecho a la jubilación ordi-

naría, las personas enumeradas en el artículo 25 tendrán derecho a percibir la pensión en la proporción de uno por ciento de la jubilación ordinaria por cada año de servicios.

Art. 34. — El derecho a pensión se extingue:

- 1o. Para la viuda, viudo o madre cuando contra- jere nuevas nupcias.
- 2o. Para los hijos que no estuvieren imposibili- tados para el trabajo, desde que llegasen a los 18 años.
- 3o. Para las hijas o hermanas solteras desde que contraigan matrimonio.
- 4o. En general, por vida deshonesta, vagancia o por domiciliarse en el extranjero sin permiso previo del poder ejecutivo nacional.

CAPITULO IV

Fondos de la caja

Art. 35. — El capital de la caja se formará desde la fecha de promulgación de esta ley:

- a) Con el importe del descuento forzoso del 5 por ciento de los sueldos de las personas compren- didas en el artículo 2o., siempre que no excedan de mil pesos mensuales, en cuyo caso el descuento se hará solamente sobre esta última cantidad.
- b) Con el importe de un mes de sueldo pagadero en 36 mensualidades continuas de cada uno de los actuales empleados y obreros perma- nentes.
- c) Con el importe del primer mes de sueldo de cada empleado u obrero que llegue a ser per- manente, el que se abonará en 36 mensualidades.
- d) Con la diferencia del primer mes de sueldo, cuando el empleado u obrero pase a ocupar un empleo mejor rentado o perciba un aumen- to de sueldo.
- e) Con los recursos provenientes del artículo 51.
- f) Con una contribución mensual de las empre- sas, igual al 8 por ciento de los sueldos y jor- nales de todos los empleados y obreros per- manentes, siempre que el sueldo no exceda de mil pesos mensuales en cuyo caso la contri- bución se pagará solamente sobre esta última cantidad.
- g) Con el importe de los fondos, más sus intere- ses, que con anterioridad a la promulgación de la presente ley han debido contribuir las em- presas para la jubilación de su personal, de acuerdo con lo que hubiesen estado obligadas por sus contratos de concesión y por las or- denanzas municipales o leyes nacionales o pro- vinciales.
- h) Con el importe de las multas en que incur- rieran las empresas, que no tengan otro des- tino por ley o por contrato.
- i) Con los intereses y beneficios procedentes de la colocación de los fondos de la caja.
- j) Con las donaciones y legados que se le hagan.

Art. 36. — Los fondos y las rentas que se obtengan de esta ley serán de exclusiva propiedad de las per- sonas comprendidas en sus disposiciones, y con ellos se atenderá el pago de las jubilaciones, pensiones, re- tiros y subsidios que se acuerden en lo sucesivo, de conformidad con la misma y los gastos que origine la administración de la caja.

En ningún caso podrá disponer de ellos para otros fines, bajo la responsabilidad personal de los miem- bros del directorio, que se hará extensiva judicial- mente a sus sucesores.

Art. 37. — Todos los fondos de la caja serán depo- sitados en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, salvo las sumas que fije el directorio co- mo indispensables para los pagos corrientes.

Art. 38. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar- tículo anterior, los fondos de la caja, descontadas las sumas indispensables para los pagos corrientes, serán invertidos previa resolución del directorio en cada ca- so, de manera que produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización, en títulos de la renta nacional, o que tengan la garantía subsidiaria de la Nación.

Hasta el 50 por ciento de los fondos capitalizados cuando el directorio crea oportuno podrá ser investi- do en préstamos a los empleados u obreros compren- didos en esta ley, que tuvieran más de 10 años de servicios, con garantía de primera hipoteca, y con destino exclusivo a la construcción o adquisición de casas para habitación de sus propietarios hasta la suma de 10.000 pesos y en proporción al sueldo del empleado u obrero, debiendo ser dicho sueldo por lo menos equivalente, al triple de la cuota que se debe satisfacer mensualmente por concepto de am- ortización e intereses. Estos préstamos gozarán de un interés no mayor del 7 por ciento y se pagarán por amortizaciones acumulativas en un plazo que no ex- ceda de 15 años, pudiendo anticiparse en cualquier momento su cancelación parcial o total de acuerdo con las tablas que al efecto fije la reglamentación de esta ley. Dichos préstamos podrán ser combinados con un seguro ordinario de vida. Podrá acordarse también préstamos de dinero a los empleados u obre- ros con más de cinco años de servicios, hasta una suma no mayor del importe correspondiente a tres meses del sueldo que goce el empleado u obrero, amortizables en doce mensualidades, siempre que res- ponda a ellos el fondo acumulado de sus aportes per- sonales. Todos los derechos emergentes de esta ley quedan afectados al cumplimiento de las obligacio- nes que el empleado u obrero haya contraído en vir- tud de este artículo.

Art. 39. — Las empresas a que se refiere la pre- sente ley están obligadas a practicar los descuentos a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 35 en los sueldos del personal permanente de sus res- pectivas dependencias y depositarlos mensualmente en dinero efectivo en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la caja, dentro de los treinta días si- guientes de cada mes mes vencido, sin deducir can- tidad alguna por ningún concepto.

Art. 40. — Las sumas con que deben contribuir las empresas de acuerdo con el inciso f) del artículo 35, de la presente ley, deberán ser depositadas en el tiempo y forma que para el depósito de los descuentos esta- blece el artículo 39.

Las sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 35, deberán ser depositadas por las empresas en la misma forma, dentro de los treinta días de promulgada la presente ley.

Art. 41. — Las empresas que no cumplieran con las disposiciones de los artículos precedentes incurri- rán en una multa de doscientos pesos diarios, después de la intimación que al efecto de ese cumplimiento, debe hacerles el presidente del directorio de la Caja, quien tendrá personería para promover ante el poder ejecutivo, o ante los tribunales de justicia, las accio- nes ejecutivas pertinentes.

CAPITULO V

Administración de la Caja

Art. 42. — La administración de la Caja estará a cargo de un directorio formado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado quien durará cuatro años en sus funciones, y un representante de las empresas y otro de los empleados y obreros de cada uno de los servicios públicos comprendidos en esta ley. Los directores durarán también cuatro años en sus funciones y se renovarán por mitades cada dos años.

En ningún caso podrán formar del directorio más de un representante de las empresas y otro de los empleados y obreros de un mismo servicio público, debiendo pertenecer ambos representantes a diferentes empresas de dicho servicio público, salvo el caso de que este estuviera atendido por una sola empresa.

A los efectos de este artículo se declaran servicios públicos distintos uno de otro, los de los tranvías, teléfonos, telégrafos y radiotelegrafía, gas y electricidad, aguas corrientes y servicios sanitarios.

Art. 43. — Para la elección de sus representantes, cada una de las empresas dispondrá de un número de votos proporcional al total de sueldos y salarios abonados en el año inmediato anterior.

Los representantes de los empleados y obreros serán designados con voto secreto por una asamblea de delegados, los cuales serán electos, sin intervención de las empresas, en comicios con votación secreta, por los empleados y obreros permanentes, a razón de un delegado por cada 500 empleados y obreros o fracción no menor de 250.

Simultáneamente a la elección de directores titulares se elegirá, en la misma forma, un representante suplente para cada titular, quien entrará a formar parte del directorio en reemplazo del titular, por renuncia, fallecimiento o cualquiera otra causa que determine una ausencia de este mayor de tres meses.

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará los trámites electorales y del escrutinio de acuerdo con estas bases, y presidirá la primera elección por intermedio del Departamento Nacional del Trabajo y la Inspección de Justicia, estando la dirección de las siguientes a cargo de la Caja, con la intervención de la Inspección de Justicia.

Art. 44. — El directorio nombrará y removerá a los empleados de la Caja, dictará el reglamento general de ésta, levantará el padrón de empleados y obreros, expresando el sueldo, categoría, años de servicios y demás datos necesarios a los fines de la presente ley.

Dispondrá de la percepción e inversión de los fondos de la Caja, fiscalizando a las empresas en lo pertinente, y anualmente fijará su presupuesto de gastos y el del monto de las jubilaciones y pensiones que deberán ser satisfechas durante el año con los fondos de la Caja, los que se someterán a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando los recursos calculados no alcancen a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones que deberán ser satisfechas durante el año, la Nación contribuirá con la diferencia.

Art. 45. — El presidente tendrá voz y voto en las deliberaciones del directorio prevaleciendo su voto en caso de empate. Es el ejecutor de las resoluciones del directorio y su representante legal. Los empleados de la Caja estarán bajo sus inmediatas órdenes pero su nombramiento y remoción corresponderá al directorio.

Art. 46. — En ausencia del presidente de esa Caja, el directorio será presidido por el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias.

CAPITULO VI

Disposiciones generales

Art. 47. — Cuando alguna de las empresas comprendidas en esta ley pasen a ser propiedad del Estado o de la Municipalidad, de acuerdo con las respectivas concesiones o por convenios ulteriores, el régimen de esta Caja quedará subsistente para sus respectivos empleados y obreros.

Art. 48. — El monto de la jubilación, retiro, pensión o subsidio que se acuerde en virtud de esta ley no excederá de lo que corresponda a un sueldo máximo de un mil pesos moneda nacional por mes, aunque el beneficiario goce de mayor retribución.

Art. 49. — Ninguno de los beneficios concedidos por esta ley se acordará a los empleados y obreros actualmente en condiciones de obtenerlos, sino después de haber transcurrido tres años de su promulgación.

Art. 50. — Las empresas estarán obligadas a suministrar al directorio de la caja todas las informaciones que solicite sobre el personal y a permitir las comprobaciones que juzgue pertinentes, bajo apercibimiento y pena de multa variable entre 500 y 2.000 pesos.

Art. 51. — Los actuales empleados y obreros que por haber prestado servicios con anterioridad a la fecha en que se ordenó el descuento forzoso a que se refiere el inciso a) del art. 35 de esta ley, o por cualquier otro motivo no hayan contribuido a la formación del fondo de la caja con el 5 o/o de todos los sueldos percibidos durante el número de años acreditados para acogerse a sus beneficios, sufrirán a su opción un descuento adicional de 3 o/o en sus sueldos a partir del tercer año de promulgada esta ley o un descuento de 10 o/o en sus jubilaciones, hasta reintegrar al fondo de la caja una suma igual al 5 o/o de los sueldos correspondientes a los años requeridos para la jubilación sobre los cuales no se les hizo el descuento forzoso del 5 o/o. Si en la fecha en que por esta ley tenga derecho a acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria por tener la edad y los años de servicios requeridos, el empleado u obrero continuara trabajando en el desempeño de su puesto sin acogerse a la jubilación, se le acreditará mensualmente el importe que le hubiera correspondido percibir por jubilación hasta reintegrar a la caja el importe total de lo que aun adeudase por el concepto a que se refiere este artículo.

Si falleciere el empleado u obrero sin haber reintegrado a la caja la suma adeudada por dicho concepto, se continuará haciendo el descuento del 10 por ciento sobre el monto de la pensión a que tenga derecho su familia.

Al efecto de lo establecido en este artículo, el directorio de la caja formulará en cada caso el cargo de lo que adeuda por dicho concepto cada empleado u obrero.

Art. 52. — Los empleados y obreros que con anterioridad a la vigencia de esta ley y a partir del 25 de septiembre de 1918 hubiesen sido destituidos por causas no previstas en esta ley, tendrán derecho a los beneficios que ella acuerda, con un 10 o/o de descuento.

En las mismas condiciones podrán obtener pensión las personas a que se refiere el art. 25, cuando los causantes hubiesen fallecido con posterioridad al 25 de septiembre de 1918 y antes de la promulgación de esta ley.

Art. 53. — Los empleados y obreros ya jubilados o pensionados por las empresas, tendrán derecho a acogerse a las disposiciones de esta ley, en

las mismas condiciones que los empleados y obreros en actividad. Pero a los efectos de la contribución que establece el artículo 35 como asimismo en cuanto al monto de la jubilación o demás beneficios que correspondan, se calcularán sobre el término medio de los sueldos o jornales percibidos durante los últimos cinco años anteriores a su retiro.

Art. 54. — A los efectos de la jubilación de los empleados y obreros del estado, de la municipalidad de la capital federal o de las empresas ferroviarias, la caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles, la caja municipal de jubilaciones, retiros y subsidios de la capital federal y la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados y obreros ferroviarios, computarán respectivamente, los servicios que dichos empleados y obreros hayan prestado en las empresas de servicios públicos sujetas a las disposiciones de esta ley.

A los actuales empleados y obreros de las empresas de servicios públicos comprendidas en esta ley, se les computarán también los servicios prestados con anterioridad en las distintas ramas de la administración nacional o de la municipalidad de la capital federal y en las dependencias de las empresas ferroviarias.

En uno y otro caso, el cómputo se hará sin bonificación de tiempo.

Art. 55. — En los casos del artículo anterior, esta caja transferirá o reclamará, respectivamente a la caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles o a la caja municipal de jubilaciones, retiros y subsidios de la capital federal o a la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados y obreros ferroviarios, las sumas que proporcionalmente correspondan en cada caso.

Art. 56. — Las jubilaciones y pensiones son inembargables e inalienables. Será nula toda venta, cesión o constitución de derechos que recaigan sobre ellas y que impida su libre disposición por el titular de la misma.

Art. 57. — El directorio de la caja reglamentará esta ley y someterá la reglamentación a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 58. — A los efectos de la contribución de las empresas, quedan estas autorizadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponde.

Art. 59. — La caja formulará un censo de los empleados y obreros comprendidos en la presente ley, como asimismo de las personas a que se refiere el art. 25, a cuyo efecto deberá llevar un registro permanente que contenga todos los datos referentes a los empleados y obreros y sus respectivas familias.

La caja dentro de los tres primeros años de su funcionamiento deberá hacer un estudio matemático sobre las bases de la técnica actuarial, cuyo resultado se elevará al Poder Ejecutivo proponiendo las modificaciones a esta ley, que creyere convenientes, y en los años sucesivos presentará al Poder Ejecutivo un informe anual que haga conocer la situación financiera y administrativa actual y futura de la caja, cuyo informe deberá ser publicado en el Boletín Oficial y en dos diarios de la mayor circulación.

A los efectos de los beneficios que acuerda esta ley y del censo a que se refiere este artículo, todos los empleados u obreros comprendidos en la presente ley están obligados a suministrar los datos correspondientes a las personas mencionadas en el artículo 25, como asimismo a hacer la declaración de nacimiento o de-

función de las mismas personas dentro de los 30 días de producido el caso.

Art. 60. — La caja mandará practicar una clasificación del personal de los diferentes servicios públicos en relación a la naturaleza de sus funciones o trabajos, para determinar las condiciones de preferencia o excepción que por razón de edad o de años de trabajo, correspondiera establecer y elevará sus resultados, con el dictamen correspondiente al Honorable Congreso por intermedio del Poder Ejecutivo dentro del término de dos años.

Art. 61. — Los empleados y obreros que por pertenecer a empresas que tienen agencias o sucursales fuera de la República, fueren cambiados de destino, siendo trasladados a servir en otros países, tendrán derecho a la devolución de sus aportes, con el 5 por ciento de interés. Si volvieran a la República podrán reintegrarse al goce de todos los derechos que acuerda esta ley restituyendo las sumas retiradas, con más el mismo interés del 5 por ciento y cumpliendo las otras obligaciones que ella impone.

Art. 62. — Las jubilaciones, retiros, pensiones y subsidios serán acordados por el directorio de la caja ante el cual deberán solicitarse.

En caso de disconformidad del interesado, la resolución del directorio será apelada ante el juez civil en turno, quien con las constancias del expediente administrativo u otras que, de oficio y para mejor proveer, solicite de las autoridades de la caja, resolverá sobre la correcta e incorrecta aplicación de la ley.

Art. 63. — Derógase toda disposición de otras leyes que se oponga a las de la presente.

Art. 64. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, septiembre 14 de 1920.

Vicente C. Gallo. — Octavio Iturbe. — Ricardo Caballero.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión en general.

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

A la altura del período parlamentario en que nos encontramos, y próximos, por consiguiente, a su clausura, se impone el deber de la brevedad en el informe de este asunto. No es éste un deber fácil de cumplir, pero yo procuraré llenarlo, en la medida de lo posible, en homenaje al respetable deseo del H. Senado de considerar los múltiples asuntos que están comprendidos en las diversas órdenes del día pendientes.

Comenzaré por establecer que el despacho que el H. Senado tiene a su consideración, conlleva una iniciativa de la Comisión de Legislación, en el sentido de que no se refiere a un proyecto venido en revisión, que está subsistente, ni a un proyecto presentado por algunos de sus miembros.

La H. Cámara de Diputados sancionó un proyecto sobre esta materia, que vino en revisión al H. Senado en marzo de 1919. La Comisión de Legislación, a pesar del empeño que puso en despacharlo en tiempo hábil, no pudo hacerlo porque la consideración de algunos de sus aspectos más importantes estaba vincula-

da a la gestión que realizaban las empresas de tranvías de la Capital Federal ante la Municipalidad de la misma, a los efectos de un aumento de tarifas, considerado indispensable para hacer el aporte que la ley en trámite les imponía.

La ordenanza municipal, que ha autorizado la elevación de las tarifas, imponiendo como una condición a las empresas de tranvías la concurrencia con el ocho por ciento a la formación del fondo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ha tenido su sanción en el presente año, producida ya, por virtud de la ley Olmedo, la caducidad del proyecto enviado en revisión por la H. Cámara de Diputados.

La comisión, mientras tanto, había estudiado este asunto y recibido permanentemente, unas veces en forma oficial por comunicaciones dirigidas al cuerpo, en otras ocasiones por gestiones directas ante los miembros que lo forman, había recidido persistentemente, digo, la expresión del deseo del numeroso gremio afectado por las disposiciones de este proyecto de ley, en el sentido de que fuera despachado el asunto. La naturaleza de éste, la reiteración respetuosa de esas gestiones y el justo concepto del interés público a él vinculado, indujeron a la comisión a continuar en su trabajo y formular despacho. En el curso de su labor se presentó ante la H. Cámara de Diputados un proyecto por el señor Diputado Vergara, que comprendía, dentro de su articulado, la casi totalidad de las reformas o ampliaciones solicitadas por un comité especial de obreros pro jubilación.

La comisión ha tenido presente el proyecto de la H. Cámara de Diputados, las presentaciones diversas hechas por empleados y obreros y las observaciones formuladas por las empresas de servicios públicos comprendidas en el despacho de la ley en gestación. Los directores y gerentes de esas empresas fueron invitados al seno de la comisión habiéndoles pasado, previamente, ejemplares del proyecto que estaba a estudio.

Es justo dejar constancia de que todos los gerentes de las empresas consultadas han manifestado la mejor voluntad, en el sentido de facilitar la sanción de esta ley entendiéndole que, si ella satisfacía legítimas aspiraciones de los empleados y obreros, ella iba a trascender también en beneficio de los servicios públicos, siendo un estímulo y una sanción económica de mejoramiento y tranquilidad para el presente y el futuro en favor del numeroso personal de ambos sexos que le consagra sus actividades.

Se han hecho observaciones de índole dis-

tinta que la comisión ha tomado en cuenta para atenderlas en la medida posible, procurando no alterar los conceptos y las normas fundamentales ya consagrados en la legislación argentina en esta materia, y evitar, dentro de sus previsiones, todo lo que fuera un peligro evidente para la estabilidad y el funcionamiento de la Caja en el futuro.

De ahí que, procediendo con ese criterio, no le haya sido permitido aceptar todas las indicaciones formuladas, porque si ellas se han inspirado en el propósito de establecer para el futuro las mejores condiciones posibles para sí y sus familias y, si eso es humano, si es legítimo, si es respetable de parte de los obreros y empleados, es también deber de los poderes públicos encauzar esas aspiraciones y esos deseos, dentro de normas que aseguren la estabilidad de la institución y permitan contemplar con relativa tranquilidad su desenvolvimiento ulterior, ya que no es posible asentarla sobre bases técnicamente indiscutidas.

La comisión ha tenido presente, en todo momento, las disposiciones de la ley de jubilaciones ferroviarias, porque ella constituye un molde dentro del cual deben ajustarse los preceptos de las nuevas leyes, análogos, que tiendan a organizar cajas similares, a la que han constituido los poderes públicos de la Nación, tratándose de los empleados ferroviarios.

No habría sido discreto, ni prudente establecer en esta ley modificaciones fundamentales, o direfencias de importancia, en relación a las prescripciones que contiene la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias, porque se trata en el fondo de servicios idénticos, en cuanto tienden a satisfacer necesidades colectivas y requieren la prestación de actividades también idénticas, en su esencia. Se trata de empleados y obreros que desenvuelven su labor en un mismo orden de servicios de interés público, y no habría razón para que se creara en favor o en perjuicio de los unos o de los otros, situaciones de desventaja o de superioridad, que podrían despertar sin motivos suficientes, sin razón justificada, emulaciones o rivalidades perturbadoras, que habrían de trascender en reclamaciones ulteriores en procura del restablecimiento de la igualdad.

Es por eso que este proyecto de ley reproduce, textualmente, muchas de las disposiciones de la ley de jubilaciones ferroviarias; y hace en otras de ellas, simplemente reformas de detalle, o aclaraciones para dar mayor equidad de las soluciones que consagra, recogiendo la experiencia de su aplicación.

Con tal motivo, la comisión ha escuchado las opiniones del presidente de aquella Caja, el señor Juan B. Brivio, a quien invitó a su seno para consultarle. Pero el sistema de la ley, en uno y en otro caso, es igual en cuanto a los empleados y obreros que comprende; en cuanto a los derechos que acuerda; en cuanto a los sistemas y métodos de financiación; en cuanto a los recursos con que ha de ser formada la caja; en cuanto al procedimiento y a la junta administradora, y, finalmente, en cuanto a los requisitos de edad y años de servicios requeridos para la jubilación o el subsidio en las distintas formas que la misma ley establece, salvo modificaciones de escasa importancia.

Se ha procurado, repito, mantener la mayor igualdad posible, teniendo en cuenta la similitud de los servicios que se prestan. La comisión habría deseado hacer algunas clasificaciones de categorías, según el sexo de los empleados, según la naturaleza de los servicios prestados y los peligros que esos servicios representen para la salud y para la vida, a los fines de graduar distintas edades y diferentes años de servicios; pero ello no le ha sido posible, porque esto supone una clasificación de orden técnico aplicada a servicios públicos de naturaleza las más diferentes. Ello podría ser materia de ulteriores disposiciones, previos los informes científicos y técnicos del caso, según la calidad de los servicios que se presten — ya que no sería estrictamente justo en principio—la apreciación con igual criterio, de los diferentes servicios, atenta la diversidad de su naturaleza, unas veces sedentaria y tranquila en una oficina de trabajo, otras veces expuestas a las inclemencias del tiempo y con peligro mismo de la vida. Es por eso que se ha proyectado una disposición nueva, no comprendida en la ley de jubilaciones ferroviarias, que contempla esta situación y que tiende a aportar para el futuro los elementos indispensables de juicio, que en el presente no se han tenido, ni ha sido materialmente posible tener a la mano.

Esta ley se inició hace algunos años por una gestión del entonces Diputado doctor de Veiga. Desde su origen suscitó las simpatías lógicas de todo el personal de empleados a quienes venía a favorecer y motivó una opinión auspiciosa encaminada a obtener su sanción. Las esperanzas surgidas desde aquella hora, no han hecho sino avivarse en el transcurso del tiempo por la iniciación de iniciativas diversas en el mismo sentido y por el hecho de la sanción de la ley de jubilaciones ferroviarias, que ha venido a contemplar la situación

de empleados y obreros que tienen dedicadas sus actividades a un orden de trabajo idéntico o similar al que prestan los demás empleados de servicios públicos.

La ley, en su origen, estaba limitada a determinados servicios públicos y contemplaba exclusivamente los de la Capital Federal, materia de jurisdicción nacional o municipal.

La comisión, de legislación ha ampliado el concepto de los servicios públicos y ha creado una situación de opción que permite a las empresas, a los empleados y a los obreros de servicios públicos, que funcionan fuera de la Capital de la República, acogerse a sus beneficios, con cargo de hacer efectivas todas las obligaciones y responsabilidades que ella determina, y expresando su voluntad por el órgano caracterizado de la autoridad de quien depende.

Es así como la ley se refiere a los servicios de tranvías, teléfonos, telégrafos, gas, electricidad y radiotelegrafía, comprendiendo, además, los de agua corriente y servicios sanitarios que existen o pueden existir fuera de la Capital.

Un autor francés de derecho administrativo, estudiando los contratos de interés colectivo, ha hecho notar que en las ciudades, especialmente, las necesidades de confort de la civilización moderna, han llevado a crear una multitud de servicios públicos ignorados de nuestros padres, o apenas supuestos por ellos, servicios que han debido concederse a poderosas compañías a causa de la importancia de los capitales que ellos requieren. Pero, este nuevo estado de cosas—agrega—tanto en la producción, como en los transportes, debía, necesariamente, determinar cambios del punto de vista jurídico. Formas desconocidas de contratar han sido creadas en ellas. El individuo desaparece detrás de la colectividad que lo disimula o lo absorbe, que un individuo contrate con una colectividad, sea que dos colectividades contraten entre ellas. Tales son los contratos que vemos ahora elaborarse todos los días en la vida corriente, entre un patrón o un sindicato de patrones con un sindicato de obreros, contrato de una comunidad con una administración con una compañía concesionaria de servicios públicos, conteniendo estipulaciones en favor de sus futuros clientes.

Como una consecuencia lógica de esta ampliación de las funciones del estado relativas a servicios públicos, directamente atendidos o entregados a particulares mediante concesiones para su explotación bajo el control del poder del Estado, como soberano, han surgido las empresas de servicios públicos encargadas

de realizar y de satisfacer necesidades colectivas, que el estado, por un motivo o por otro, considera que pueden ser atendidas en mejores condiciones por la iniciativa y el capital particulares. De ahí ha surgido lo que en la doctrina y el tecnicismo jurídico norteamericano, se llama **quasi public corporations** que están definidas por su objeto, por la forma y los requisitos de su constitución por el carácter público que revisten, y en cierto modo también, por los derechos de autoridad pública de que están investidas para que puedan llenar plenamente sus objetivos.

En esa categoría están colocadas las empresas que tienen a su cargo los servicios de tranvías, de telégrafos, teléfonos y radiotelegrafía, y en general de electricidad, y lo están también, por definición, las que prestan servicios tan fundamentales como el de provisión de agua sana y potable y atienden los servicios sanitarios de una ciudad, aunque, tratándose de estas últimas, fuera del caso recordar aquella observación tan exacta de Estrada, cuando en el Congreso argentino se discutía la cesión a una empresa particular de la explotación de los servicios sanitarios y de agua corriente en la ciudad de Buenos Aires: "Esos son servicios que por su esencia y por sus finalidades corresponden al régimen municipal y deben ser ejercitados por la autoridad pública."

La existencia de estas empresas, que tienen a su cargo, mediante concesiones, la realización de servicios de carácter público, empresas que revisten también carácter público, que tienen el derecho de dominio eminente para ejercitarlo en las condiciones prescriptas por las leyes y que han de realizar en la efectividad de los hechos el bien colectivo, estas empresas, decía, han dado origen a una múltiple legislación, a nuevas formas jurídicas, que contemplan el interés de la colectividad, el interés del individuo aisladamente y el interés, que ha de respetarse también, de los capitales y de las actividades privadas, vinculadas a la existencia y desenvolvimiento de las instituciones organizadas.

Ha surgido una copiosa legislación inspirada en un concepto a la vez de mayor solidaridad social; ella constituye una parte de la materia fecunda, todos los días ampliada y renovada del derecho público, en curso de permanente evolución, bajo la influencia y al impulso de las nuevas ideas que, hijas de una civilización superior y de un concepto más solidario de la vida humana, en todo el orden de sus actividades y de sus manifestaciones, crea fórmulas legales y moldes jurídicos animados

de un sentimiento de mayor y más fértil fraternidad social. A ese tipo de leyes, hijas de la civilización moderna, impuestas por el nuevo estado social y jurídico, pertenecen estas leyes de jubilación y de pensión de los empleados y obreros de servicios públicos. Al dictarlas, el Estado, consigna, en realidad, en textos escritos y obligatorios, conceptos jurídicos que están en el ambiente, en forma de aspiraciones legítimas, fundadas en el trabajo, y en el derecho a un mejor destino, dentro de la sociedad que utiliza sus servicios en múltiples formas de actividad. A ese tipo de leyes, inspiradas en ese concepto, responde esta de jubilaciones y de pensiones de los empleados de empresas particulares que prestan servicios públicos, armónica con la ley de jubilaciones ferroviarias, tan amplia e ilustradamente discutida en el parlamento argentino con argumentos y con fundamentos tales que la repetición, en el caso presente, resultaría sin justificación. No he de volver, pues, sobre conceptos ya emitidos en la oportunidad a que me he referido: en este Senado la ley de jubilación ferroviaria fué ampliamente debatida y materia de un informe erudito y fundamental por parte del señor Senador Roca, que presidía entonces la Comisión de Legislación, interviniendo el señor ministro de Obras Públicas doctor Torello y los señores Senadores del Valle Iberlucea, Linares, Melo y Torino, en primer término.

Está el Diario de Sesiones de hora reciente, con la impresión fresca, de aquel debate, lo que haría inexcusable que en este momento yo repitiera los argumentos que, en un sentido o en otro, se hicieron valer para fundar el derecho del Estado para dictar estas leyes, o para explicar, en concreto, las diferentes disposiciones contenidas en ellas.

Pero como un dato ilustrativo, o como una información acaso necesaria para los señores Senadores, habré de consignar algunos antecedentes de hecho.

La comisión no ha podido obtener la totalidad de los datos que ella gestionaba referentes al número de empleados y al monto de los sueldos correspondientes a todas las empresas comprendidas en las disposiciones de la ley, pero los tiene respecto de las más importantes.

Según esos datos, el total del personal correspondiente a las compañías de tranvías, de teléfonos, de electricidad y Primitiva de Gas en la ciudad de Buenos Aires sería de 22.793. El monto de esos sueldos, mensualmente, representaría 3.175.000 pesos. El descuento mensual del 5 por ciento sobre esos sueldos sería de 158.764.31 pesos; el aporte de las

empresas en concepto de contribución del 8 por ciento significaría 254.012.90 pesos, lo que da un total de 412.777.21 pesos por mes, o sean en el año, 4.951.479 pesos. Dentro de los diez años, calculando el interés del 6 por ciento sobre estas sumas sucesivamente acumuladas, la Caja tendría, aproximadamente, un capital de 60.000.000 de pesos. En la actualidad, como consecuencia del aporte que las empresas efectúan mensualmente, en cumplimiento de la ordenanza municipal que las autorizó a elevar sus tarifas, existían depositados, hasta agosto último, alrededor de setecientos mil pesos. Dentro de tres años, cuando por el funcionamiento de la ley, hubiera de acordarse la primera jubilación, la Caja tendría, por razón de aportes y sin computar intereses, un capital de 15.000.000.

Por estas cifras el honorable Senado podrá apreciar la importancia que la institución a crearse reviste y la magnitud de intereses de todo orden que ella va a satisfacer. En sus estudios la comisión los ha vinculado a los criterios expuestos y a los cálculos formulados en ocasión de discutirse la ley de jubilación ferroviaria, para contemplar sus resultados posibles, dentro de las inevitables incertidumbres que toda previsión en esta materia supone.

La sanción de esta ley, ha de llevar un noble y fecundo estímulo al espíritu de miles de trabajadores; pondrá una nota de mayor halago y tranquilidad en la visión del futuro dentro de miles de hogares y ha de traseñar también, por lo mismo, en una mejor disciplina y en una más segura eficiencia de los servicios públicos, a cuyo funcionamiento todos estos trabajadores tienen consagradas sus actividades.

De esta ley podrá decirse que hace parte de lo que el ex presidente Deschanel llamaba "ley política social de la república". Coloco bajo la autoridad de su palabra, estas últimas con que yo clausuro este informe, reservando para la discusión en particular la expresión en detalle de los fundamentos correspondientes a los diversos aspectos de la ley, omitidos en este instante en homenaje a la brevedad.

El ex presidente Deschanel decía: "Nuestra política social es la consecuencia del sufragio universal; la república, no es solamente la expresión político, sino también la expresión social de la democracia. Las reformas sociales son caras y, para cumplirlas, es necesario que el país sea rico, y la prosperidad nacional no será posible, más que en la paz social. Por consecuencia, la primera condición

del mejoramiento de la suerte de los trabajadores, no es la guerra de clases, es la solidaridad."

Yo creo que esta ley es una ley de solidaridad entre las clases sociales, que será una ley de pacificación porque será una ley de justicia y de nobles estímulos, y que, con ese concepto, debe ser sancionada por el honorable Congreso. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las galerías!*).

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

— Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Esteves. — Pido la palabra.

Existen en las órdenes del día, alrededor de trescientos y tantos despachos de pensiones que de ser sancionados, tienen que pasar inmediatamente a la otra cámara para ser resueltos a su vez, y como el término es angustioso, pediría que, después de tratar el asunto que está en discusión, se dé preferencia a los despachos a que me he referido.

De esta manera se comunicaría a la otra cámara el resultado de la votación que se obtenga en cada una de ellas. El autor del informe tan elocuente y tan claro que acabamos de escuchar, está conforme con la indicación que hago y, por ese motivo, me permito pedir a la H. Cámara que la acepte y se consideren en consecuencia, de inmediato, todos los despachos sobre pensiones y después continuar la discusión en particular del despacho que acaba de informarse.

— Apoyado.

Sr. Presidente (Villanueva). — ¿El señor Senador se refiere a los despachos sobre pensiones y a todos los demás pendientes?

Sr. Esteves. — Me refiero solamente a las pensiones, porque no sé que haya pendientes otros asuntos de importancia.

Sr. Presidente (Villanueva). — Porque la presidencia desearía saber, exactamente, cuál es la moción del señor Senador.

Sr. Esteves. — Que se tomen en consideración los despachos sobre pensiones civiles y militares en primer término y, después, continuar con la discusión en particular del despacho que acaba de informarse.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión la moción del señor Senador por Tucumán. Se va a votar.

— Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Villanueva). — Orden del día número 18.